



Citar este número al responder:
11001-03-26-000-2020-00055-00

Santiago de Cali, veintinueve (29) septiembre 2021.

Doctor

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Honorable Magistrado Ponente

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera – SUBSECCIÓN B.

Correo electrónico: Ces3secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C.

Medio de control: Recurso Extraordinario de Revisión
Expediente: 11001-03-26-000-2020-00055-00
Actor: REYES RIVEROS LTDA Y OTROS
abogadosconsultores@hotmail.com
Demandados: Municipio de Buenaventura; Corporación Autónoma Regional Valle del Cauca – CVC.
njudiciales@valledelcauca.gov.co; afacahu@hotmail.com
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
dir_juridico@buenaventura.gov.co
notificacionesjudiciales@cvc.gov.co
notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co
njudiciales@invias.gov.co
gabrielpenillas@hotmail.com;
notidel1cedo@procuraduria.gov.co
Recurrente: Cadsa Gestiones y Proyectos S.A. y Otros.
Asunto: **PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL RECURSO EXTRAORDINARIO.**

GABRIEL ANTONIO PENILLA SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.470.525, portador de la Tarjeta Profesional de Abogado número 95.266 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, según poder conferido por el

doctor **MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.399.245, expedida en la Ciudad de Cali Valle del Cauca, en su calidad de Director General, que acredita con las constancias anexadas, ante usted, y dentro del término de Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021, me permito **contestar el RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN**, según Auto de fecha veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2.020), corregido mediante Auto de fecha siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2.021), proferido por el Honorable Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B., para que **se declare la nulidad de la Sentencia de Segunda Instancia de fecha veinte (20) de marzo de 2019, Proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – Sala de Decisión**; en consecuencia, se profiera nueva Sentencia que reemplace la proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, con fundamento en lo siguiente:

I- CAUSALES DEL RECURSO DE REVISIÓN.

Efectivamente, el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consagra como causal de revisión 5) **“Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”**, dado que el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca al proferir la Sentencia quedó incurso en la mencionada causal que INVALIDA la Sentencia, dado que condena a los integrantes del Consorcio Progreso Buga, sin haber hecho el estudio de la relación existente entre el INVÍAS y las sociedades llamadas en garantía, máxime cuando la demandada alegó **“CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA”**, tal como lo indicó el RECORRENTE en su Memorial de Demanda; siendo necesario que el Honorable Consejo de Estado a través del RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN declare la nulidad de la sentencia de segunda

instancia proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, con ponencia de la Magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides, con fecha 20 de marzo de 2019, dentro del proceso con radicación 76109-33-31-002-2008-00071-01, instaurado por AZARIAS ALOMIA RIASCOS Y OTROS contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y OTROS. Además, Como consecuencia de la declaración anterior, la Honorable Sala profiera nueva sentencia que reemplace la proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en armonía con las disposiciones legales aplicables al caso sometido a decisión de esa Corporación, al igual que con los hechos y las pruebas que se relacionan en el presente recurso, respetando el Principio de Congruencia.

II- PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A LOS HECHOS:

AL HECHO 1. Es cierto. Para el día doce (12) de abril de 2021, se presentó un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, con un torrencial aguacero que desbordó todos los pronósticos, como quedó probado en el Expediente Principal, Radicado: 6109-33-31-002-2008-00071-01, en el cual aparece una copia del **Plan de Acción Específico para la Atención de la Calamidad acontecida en el Distrito de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca**, el cual fuere realizado por la Dirección de Prevención y Atención de Desastres el 18 de abril de 2006, visible a folios 33 a 84 del cdno Ppal No. 2, a través del cual se estableció, entre otros que:

... El área afectada pertenece a la cuenca del río Dagua, entre el kilómetro 38 y 46, que se caracteriza por una precipitación anual de 8.700 m.m.

En dicho plan, se detalla con claridad **que los hechos consistieron en 11 horas de lluvias intensas que cayeron en la zona afectada, con una precipitación de**

153 mm³, el equivalente a toda el agua que cae en Manizales, durante un año...

Indica que según datos de la CVC, que se trata de un sector altamente escarpado con riachuelos y quebradas de recorrido rápido y corta extensión, los cuales tienen un nacedero a 300 metros de altura sobre el nivel de la vía, lo que al momento de la lluvia saturó los terrenos desestabilizando su lecho, produciendo una avalancha de piedras, árboles y lodo, el consecuente desbordamiento de las quebradas y por ende la pérdida de vidas humanas, vivienda, cultivos, y vehículos entre otros...

También indica el mencionado Plan que:

... más de 70.000 mm³ de lodo cayeron al río Dagua, produciendo un represamiento que generó un desbordamiento de las aguas, y la consecuente pérdida de vidas humanas, viviendas y vehículos entre otros, quedando un saldo de 37 personas desaparecidas, más de 100 viviendas arrasadas, más de 180 vehículos atrapados y aproximadamente más de 700 personas afectadas.

Expresando como teoría del origen del desastre que:

... los cauces de las quebradas eran tan estrechos que colapsaron ante el exceso de volúmenes de agua recibidos ante el torrencial aguacero, desbordando su capacidad, sumándose a las pendientes y al arrastre de los suelos arcillosos, provocando con ello los deslizamientos, y de otro lado, la persistencia de las lluvias en la zona, la actividad del hombre y la erosión, debilitaron la capa superficial de los suelos arrastrando con ello el volumen de sedimentos que colapsaron los estrechos cauces de las quebradas provocando el arrastre de empalizadas, lodo y volúmenes de suelo que constituyeron las avalanchas...

Obsérvese que estaba demostrado dentro del Expediente y acorde con los hechos que SE TRATÓ DE UNA SITUACIÓN DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR; es decir, un hecho de la naturaleza que superó cualquier expectativa de Prevención de Riesgo, como consta en el mencionado **“Plan de Acción Específico para la Atención de la Calamidad acontecida en el Distrito de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca”**, que detalla “... que los hechos consistieron en 11 horas de lluvias intensas que cayeron en la zona afectada, con una precipitación de 153 mm³, el equivalente a toda el agua que cae en Manizales, durante un año...”; siendo imprevisible esta situación; máxime en una zona que se caracteriza por ser una zona de lluvias normales.

AL HECHO 2: Es cierto.

AL HECHO 3: Es cierto.

AL HECHO 4: Es cierto.

AL HECHO 5: Es cierto.

AL HECHO 6: Es cierto.

AL HECHO 7: Es cierto. El Juzgado

El problema jurídico se contrae en determinar si las entidades demandadas incurrieron en la omisión de cuidado y mantenimiento de la vía Alejandro Cabal Pombo y si esta fue la causa de los daños ocasionados con la avalancha ocurrida el día 12 de abril de 2006.

Sobre la responsabilidad del Estado por daños causados a particulares como consecuencia de su acción u omisión en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, el Consejo de Estado⁵, manifestó que es necesario precisar si dicha falencia tuvo relevancia en la producción del daño que se alega en aplicación a la teoría de la causalidad

adecuada, la cual, a diferencia de la teoría de equivalencia de condiciones determina que cuando son varios los eventos que pudieron contribuir al daño no pueden señalarse reglas absolutas, es decir, no puede llegarse al extremo de determinar como única causa del daño aquella que corresponde al último suceso ocurrido en el tiempo, como tampoco puede considerarse que todos los antecedentes del daño son jurídicamente causas del mismo, Sino que por el contrario debe realizarse un análisis preciso sobre si la falla del Estado jugó un papel preponderante o suficiente en la producción del daño o si simplemente fue una condición del entorno que facilitó el resultado, entendiéndose como causa, aquella que se halla en conexión adecuada con el efecto semejante.

Siendo así se concluye que para endilgar responsabilidad en casos como el presente es necesario que se presenten los siguientes factores:

- La producción de un daño.
- Un deber jurídico asignado a la administración para prevenir ese daño.
- El nexo causal consistente en que la omisión u acción de la administración haya jugado un papel preponderante en la generación del perjuicio.
- Y que no haya mediado una causal exonerativa de responsabilidad como son la fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero que hizo imposible que el acto perjudicial no ocurriera a pesar de que la administración hubiese actuado con diligencia y prudencia⁶...”, concluyendo que:

“... de lo establecido, que quien hace una afirmación sobre la ocurrencia de un hecho, o quien niega la ocurrencia del mismo debe probar su dicho dentro del trámite procesal con el objetivo de dotar al operador jurídico de los elementos de juicio que le permitan pronunciarse de fondo y que le den, de ser posible, certeza sobre cómo debe resolver la litis trabada. De no ser así, no puede entrar el juez a

tener como ciertos, hechos que no se encuentran debidamente probados, de ahí que las pruebas arribadas a un proceso sean fundamentales y decisivas al momento de emitir el fallo, puesto que si no se prueban los hechos y daños alegados no se puede acceder a las pretensiones...”.

Al Hecho 8: Es cierto.

Al Hecho 9: Es cierto.

Así mismo, en este punto es importante recordar que mi Mandante a lo largo del Proceso dejó en claro que el actuar de la CVC, fue diligente, como se indica a continuación:

“SENTENCIA CON EFECTOS ERGA OMNES - Por su parte el **Decreto 3565 del 26 de septiembre de 2011** – Por el cual se modifica parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 2008, a través del cual el Gobierno Nacional dentro de la Emergencia Económica y Social **pretendía asignarle la función de prevención de riesgo a las Corporaciones Autónomas Regionales**, en la siguiente forma:

“... Artículo 1°. Reasígnese la función del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial prevista en el numeral 35 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, adicionando un numeral al artículo 31 de la citada ley, así:

"32. Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan, incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos".

Sin embargo, esta disposición fue declarada inexecutable por la Honorable Corte Constitucional mediante **Sentencia C-366 del dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012)**. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Actores: Remberto Quant González y Luis Alejandro Motta Martínez, resolviendo declarar inexecutable los artículos: 1, 2 y 3º del Decreto - Ley 3565 de 2011 *"Por el cual se modifican parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 2008"*, Sentencia con efectos Erga Omnes.

En consecuencia, la Función de Riesgo, prevención y atención de desastres NO recae en cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales, tal como lo ha indicado el Honorable Consejo de Estado en diferentes Sentencias, las cuales constituyen precedente Jurisprudencial. Veamos:..."

Visto lo anterior, en ese entonces, se trajo a colación el precedente jurisprudencial MUTATIS MUTANDI con respecto a las Acciones Populares, que dejan en claro que la función de las CAR es SUBSIDIARIA EN MATERIA DE RIESGO, **porque el Directo responsable de la superación de la vulnerabilidad o amenaza de los derechos colectivos es el municipio**; es decir la Entidad Territorial que ostenta la responsabilidad principal y directa en cuanto a la PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES.

En consecuencia, éste mismo Principio aplica para los **RECURRENTES EN RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN**, dado que al no ser Entes Territoriales no estaban llamados a soportar una indemnización millonaria, máxime cuando se trató de un caso fortuito o fuerza mayor alegada incluso por el mismo Ente Territorial.

Al Hecho 10. Es cierto.

En el presente punto es clara y palpable el Yerro del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca al señalar:

“Por tanto, no es posible liberar de responsabilidad a los demandados, quienes por mandato legal debían evaluar el riesgo que se cernía sobre la comunidad asentada en la ribera del río Dagua”⁴.

Lo anterior, como se indicó en el punto anterior, la responsabilidad recae en cabeza del Ente Territorial, tal como lo dispuso la Ley 1523 de 2012, en su artículo 14:

“... **Artículo 14.** *Los Alcaldes en el Sistema Nacional.* Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

Al Hecho 11: Es cierto.

Al Hecho 12: Es cierto.

III- EN CUANTO A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS:

3.1 La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, encuentra ajustada a Derecho la solicitud de la parte Demandante de que se DECLARE LA NULIDAD DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, con ocasión del vicio de nulidad al momento de la Sentencia, que trae como consecuencia su INVALIDACIÓN.

Como consecuencia de la declaración anterior, proferir nueva sentencia que reemplace la proferida por el Honorable TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en armonía con las disposiciones legales aplicables al caso sometido a decisión de esa Corporación, al igual que con los hechos y las pruebas que se relacionan en el presente Recurso Extraordinario de Revisión.

3.2 Condenar en costas a la parte Demandante en el Proceso Principal (en este proceso parte Demandada).

IV- CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA Y EL DEBIDO PROCESO.

Es reiterada la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado y de la Honorable Corte Constitucional, en especial la Sentencia T-5.490.941. Acción de tutela instaurada por: EL Ministerio de Defensa contra el Tribunal Administrativo del Chocó. Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO, de fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), al expresar:

4.1. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS-Alcance

“... El juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (*extra petita*) o en la que otorgue más de lo pedido (*ultra petita*), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, **pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento**. El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello...”.

El Principio de Congruencia, va de la mano con el DEBIDO PROCESO,

4.2 DEBIDO PROCESO-Vulneración al no garantizar principios de congruencia y de la non reformatio in pejus, al proferir sentencia de segunda instancia en la que agravó la decisión de primera instancia, tratándose de apelante único

Igualmente, dejó en claro el Honorable Consejo de Estado que:

24.1. El principio de congruencia de la sentencia, además se traduce en una garantía del debido proceso para las partes, puesto que garantiza que el juez sólo se pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ni *extra petita*, ni *ultra petita*, porque en todo caso, la decisión se tomará de acuerdo a las pretensiones y excepciones probadas a lo largo del desarrollo del proceso. Esto, además, garantiza el derecho a la defensa de las partes,

puesto durante el debate podrán ejercer los mecanismos que la ley ha establecido para ello en los términos adecuados.

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido el principio de congruencia *“como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, “en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó”^[49]*. Además ha establecido que siempre que exista falta de congruencia en un fallo se configurara un defecto y, por tanto, será procedente la tutela contra providencia judicial con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso.

La Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación, profirió en el 2008 la sentencia 1274^[50] de ese año, en la que estableció lo siguiente:

“... la incongruencia tiene la entidad suficiente para configurar una vía de hecho, ya que la incongruencia que es capaz de tornar en vía de hecho la acción del juez “es sólo aquella que subvierte completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando una alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, que quiebra irremediablemente el principio de contradicción y el derecho de defensa”, a tal grado que “la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea protuberante”, esto es, “carente de justificación objetiva y relativa a materias medulares objeto del proceso”. De lo contrario, “el grado y el tipo de desajuste entre la sentencia y lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, sería insuficiente para que se configure una vía de hecho judicial, así pueda existir una irregularidad dentro del proceso”^[51].

...

24.2. De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (*extra petita*) o en la que otorgue más de lo pedido (*ultra petita*), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello...”.

4.3. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y EL DEBIDO PROCESO.

Con el mayor respeto **ES EVIDENTE LA VIOLACIÓN DE ÉSTE PRINCIPIO Y DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, AL FALLAR EN CONTRA DEL LLAMADO EN GARANTÍA AL AGENTE CUANDO DENTRO DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA LA PARTE DEMANDADA ALEGÓ “CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA”, tal como lo indicó el RECURRENTE. Veamos:**

“... En el escrito de contestación de la demanda presentado por la apoderada del INVIAS, la entidad propuso como excepción “*CULPA EXCLUSIVA DE LAS VÍCTIMAS*”, así:

“Tal como establece el apoderado de los demandantes, a raíz del problemas (SIC) presentado por las crecientes del río Dagua, y las quebradas la Reina, la Guinea, la

Delfina, y la Víbora por los inviernos presentados en el año 1989, que socavaban la vía, se conformó un comité integrado por el HIMAT, el INDERENA, el INAC, la C.V.C. e INGEOMINAS, con el fin de dar recomendaciones para dar una solución definitiva a las interrupciones que periódicamente sufre la vía durante los inviernos severos.

*De conformidad con este hecho, entre las causas de este fenómeno, están:
Cuenas torrenciales.*

Inestabilidad de los taludes de la vía. Entre las conclusiones de la investigación realizada según el demandante, la erosión lateral por parte del rio Dagua y los movimientos de la masa a lo largo de las laderas de la vía, especialmente del tipo cuñas de roca, son los fenómenos que junto con las avalanchas torrenciales, constituyen los factores que han determinado y pueden determinar en un inmediato futuro la interrupción de la vía...”.

Igualmente, le asiste la razón al RECURRENTE al expresar:

“... Era deber del Juez de segunda instancia resolver en la sentencia todos los argumentos de defensa de los demandados, al igual que de los llamados en garantía, como se lo imponían los artículos 280 inciso segundo, y 281 inciso cuarto, del C.G.P., especialmente cuando el fallo de primera instancia no se había encargado de ello por haberlos exonerado previamente de toda responsabilidad. De tal suerte que la respuesta del Tribunal en esta materia constituye una visible vulneración a los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del Consorcio Progreso Buga y sus integrantes, por ausencia de un pronunciamiento de fondo sobre este punto...”. (Se resalta)

En consecuencia, con base en lo antes mencionado, está probado el error en que incurrió el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca al momento de la Sentencia que genera como consecuencia su INVALIDACIÓN.

4.3.1. DEFECTO PROCEDIMENTAL AL PROFERIR SENTENCIA

Expresó el Recurrente, que la Demanda en ningún momento se dirigió contra el Consorcio Progreso de Buga y/o sus integrantes; sin embargo, el Honorable Tribunal terminó condenando a los integrantes del Consorcio:

“... Como de los antecedentes del proceso se deriva, los demandantes impetraron la Acción de Grupo contra el Ministerio de Transporte, Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda, Ministerio del Interior y de Justicia, el Departamento del Valle del Cauca, el Instituto Nacional de Vías - Invías, el Departamento del Valle del Cauca, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y el Municipio de Buenaventura. En ningún caso la demanda se dirigió ni se refiere al Consorcio Progreso Buga y/o sus integrantes.

A pesar de que el Consorcio Progreso Buga no tenía la calidad de demandado dentro del proceso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca terminó condenando a los integrantes del Consorcio en calidad de demandados, sin advertir que estos comparecieron al proceso específicamente en calidad de llamados en garantía por el Instituto Nacional de Vías y no como demandados.

4.3.2. El Honorable Tribunal del Valle del Cauca en la Sentencia Recurrida, equipara al CONSORCIO, como Entidad de Servicios Públicos o entidad encargada de Prevención.

Es importante traer a colación lo expresado en la Sentencia Recurrida en Revisión, más exactamente, en el punto 12 que incluye a los integrantes del Consorcio de Buga como responsables por omisión en la adopción de medidas de prevención del riesgo de remoción en masa, incumpliendo su deber legal de prevención, al expresar:

“... En este marco fáctico, debidamente acreditado, se corrobora la causa para pedir, esto es, que los demandados Ministerio del Medio Ambiente, autoridad encargada hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y coordinar las acciones para prevenir la emergencia; el Ministerio del Interior desde su Oficina Nacional para la Prevención y Atención de desastres, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, en su calidad de autoridad ambiental en el territorio; el Distrito de Buenaventura y el Departamento del Valle del Cauca como autoridades responsables de la prevención de Desastres y de la planeación y ordenación del territorio en sus ámbitos regional y local; el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y los Integrantes del Consorcio Progreso Buga, ya como entidades públicas o privadas a cargo de labores preoperativas para el mantenimiento de la vía Cabal Combo, ya como asesores, coordinadores o colaboradores del Comité Técnico Nacional para la Prevención de Desastres, por omisión, fallaron en la orientación y adaptación de medidas de prevención del riesgo de remoción en masa, porque conocía o estaban en posición de conocer la magnitud del mismo y su impacto en el elemento “personas”, pero no ejecutaron acciones precisas para que la comunidad contara

con elementos tempranas y un plan de evacuación que permitiera poner a salvo sus vidas. En resumen incumplieron su deber legal de prevención”.

Como bien lo dijo el Recurrente, acorde con las responsabilidades de los integrantes del Consorcio no pueden ser considerados como una entidad privada encargada de la prestación de servicios públicos, para endilgar responsabilidad o decir que se encontraban obligados a realizar un análisis de vulnerabilidad, o que junto a las entidades públicas demandadas falló en la “...adopción de medidas de prevención del riesgo de remoción en masa, porque conocían o estaba en posición de conocer la magnitud del mismo y su impacto en el elemento “personas”, pero no ejecutaron acciones precisas para que la comunidad contara con alertas tempranas y un plan de evacuación que permitiera poner a salvo sus vidas” 14, llevándolo a concluir que incumplió un aparente deber legal de prevención; situación ésta que se aparta de Precedente Jurisprudencial que exige para determinar la responsabilidad extracontractual un hecho dañoso; el daño producido; la relación de causalidad entre la acción y el daño y los factores de atribución.

El Honorable Consejo de Estado, en reiterados Fallos, en especial dentro del Proceso Radicado: 23001233100019970893401. Actor Petrona Sierra de Fuentes y otros, nos recuerda que la Responsabilidad Extracontractual del Estado se centra en el daño antijurídico y la imputación tal como lo consagra el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Veamos:

**RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL DEL ESTADO – Elementos /
ELEMENTOS DE FUNDAMENTACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO -
Daño antijurídico e imputación.**

“... El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, hunde sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. **La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación.** Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido. Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración”.

Es clara la Jurisprudencia al expresar que es el Estado a través de las entidades estatales, quienes tiene la obligación de indemnizar el daño antijurídico; por tal razón esa obligación no es aplicable a particulares como los contratistas del Estado que son unos colaboradores de la administración pública. Los particulares pueden ser solidariamente responsables, cuando actúan como garantes o ser los generadores directos del daño.

Como bien lo dijo la Parte Recurrente, el Consorcio no puede ser considerado como una entidad privada encargada de la prestación de servicios públicos, para derivar de allí que se encontraba obligado a realizar un análisis de vulnerabilidad, o que junto a las entidades públicas demandadas fallaron en la “...adopción de medidas de prevención del riesgo de remoción en masa, porque conocían o estaba en posición de conocer la magnitud del

mismo y su impacto en el elemento “personas”, pero no ejecutaron acciones precisas para que la comunidad contara con alertas tempranas y un plan de evacuación que permitiera poner a salvo sus vidas” 14, llevándolo a concluir que incumplió un aparente deber legal de prevención.

Por último, es claro y palpable, como lo indica el RECURRENTE que el Honorable Tribunal vulneró los derechos fundamentales al Debido Proceso y Acceso a la Administración de Justicia de los miembros del Consorcio Progreso Buga llamados en garantía al proceso.

Efectivamente, el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, condena a los integrantes del Consorcio Progreso Buga, sin haber hecho el estudio de la relación existente entre el INVÍAS y las sociedades llamadas en garantía. Lo anterior resulta evidente cuando en el aparte de “Llamamiento en garantía” de la sentencia de segunda instancia se omitió el análisis de la relación jurídico procesal existente entre la entidad contratante INVIAS y las llamadas en garantía...”, situación ésta que INVALIDA LA SENTENCIA, por violación del Principio de Congruencia, junto con el Debido Proceso, el Derecho de Defensa y Contradicción.

IV. PETICIÓN.

Con fundamento en los argumentos antes mencionados, con el mayor respeto, me permito solicitarle a la Honorable Sala Declarar la nulidad de la sentencia de segunda instancia proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, con ponencia de la Magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides, con fecha 20 de marzo de 2019, dentro del proceso con radicación 76109-33-31-002-2008-

00071-01, instaurado por AZARIAS ALOMIA RIASCOS Y OTROS contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y OTROS.

Como consecuencia de la declaración anterior, proferir nueva sentencia que reemplace la proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en armonía con las disposiciones legales aplicables al caso sometido a decisión de esa Corporación, al igual que con los hechos y las pruebas que se relacionan en el presente recurso.

V. PRUEBAS.

Respetuosamente, solicito tener como pruebas, las siguientes, a fin de determinar que efectivamente se encuentra probada la causal 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra como causal de revisión 5) “**Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación**”, al no haber hecho el estudio de la relación existente entre el INVÍAS y las sociedades llamadas en garantía, máxime cuando existía prohibición legal de llamar en garantía cuando la Entidad Demandada alega culpa exclusiva de la víctima, las siguientes:

5.1 El Expediente dentro del Proceso Principal, radicado: 76109-33-31-002-2008-00071-01; para lo cual solicito con el mayor respeto al Honorable Despacho, ordenar solicitarlo al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura en el Valle del Cauca.

5.2 Las pruebas solicitadas por la Parte Demandante.

VI. ANEXOS

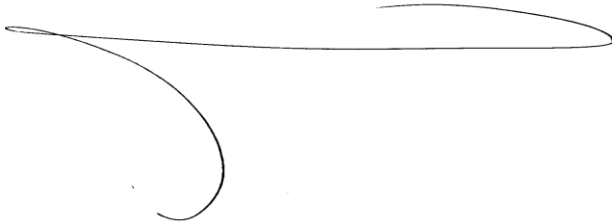
6.2. Se adjunta Poder.

VII. NOTIFICACIONES

7.1 De mi Mandante: Cra. 56 #11 - 36, Cali, Valle del Cauca, correo electrónico:
notificacionesjudiciales@cvc.gov.co

7.2 Del presente Togado: Calle 50 No. 13-15, en la Ciudad de Pereira; dirección de
notificaciones electrónicas: gabrielpenillas@hotmail.com.

Atentamente,



GABRIEL ANTONIO PENILLA SÁNCHEZ

C.C. No. 2.470.525. Tarjeta Profesional 95.266 C.S. de la Judicatura.
Apoderado CVC

Archívese en: 11001-03-26-000-2020-00055-00

Citar este número al responder:
11001-03-26-000-2020-00055-00

Señores
CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA
Atte. Dr. **MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ**
E. S. D.

ASUNTO: PODER ESPECIAL
RECURRENTE: Cadsa Gestiones y Proyectos S.A. y otros.
ACCIONANTES: Azarías Alomía Riascos y Otros.
RADICADO: 11001-03-26-000-2020-00055-00 (66052)
M.D : Recurso Extraordinario de Revisión.

MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ, mayor de edad, domiciliado y residente en Santiago de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.399.245 expedida en Cali, en mi calidad de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la cual acredito con los documentos que anexo a este escrito; me permito respetuosamente manifestar a usted que confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE**, al abogado **GABRIEL ANTONIO PENILLA SANCHEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.470.525, abogado titulado e inscrito, portador de la Tarjeta Profesional No. 95.266 expedida por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura, como abogado principal y en calidad de abogado sustituto el abogado **JULIO CÉSAR MUÑOZ VEIRA**, mayor de edad, residente en la Ciudad de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.843.184, abogado titulado e inscrito, portador de la tarjeta profesional No. 127.047 expedida por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura, para que, defienda y represente los intereses de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca en el proceso de la referencia.

Los apoderados quedan ampliamente facultados para notificarse, conciliar, presentar recursos, incidentes, nulidades, apelación adhesiva y en general ejercer el derecho de contradicción, proponer las excepciones que estime necesarias, y todas las demás acciones conforme a la Ley 1564 de 2012 se puedan ejercer para la defensa de los legítimos intereses de la Corporación.

El presente poder se otorga con fundamento a las disposiciones del art. 5° del Decreto 806 del 04 de junio de 2020. Igualmente informo que el correo del apoderado es gabrielpenillas@hotmail.com; imabogadosnotificaciones@hotmail.com; y notificacionesjudiciales@cvc.gov.co

Respetuosamente,

ACEPTO:

MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ
CC No. 94.399.245 expedida en Cali

GABRIEL ANTONIO PENILLA SANCHEZ
C.C. No. 2.470.525
T.P. 95.266 del C.S. J.

JULIO CÉSAR MUÑOZ VEIRA
C.C. No. 16.843.184
T.P. No. 127.047 del C.S.J.

Archivaseen: 11001-03-26-000-2020-00055-00

[Handwritten signature]





Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

**ACUERDO CD No. 056 DE 2019
(DICIEMBRE 16 DE 2019)**

**"POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA EL DIRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC
PARA EL PERIODO INSTITUCIONAL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2023"**

Página 1 de 2

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el literal j), artículo 27 de la Ley 99 de 1993, el Decreto Reglamentario 1076 de 2015 y los Estatutos Corporativos,

CONSIDERANDO

Que por Acuerdo No. 050 de 2019, el Consejo Directivo de la Corporación, reglamentó el procedimiento para la designación del Director (a) General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, para el periodo institucional 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023.

Que el día 13 de octubre del 2019, se publicó en el Diario "El País", en lugares públicos de la sede principal, Direcciones Territoriales y en la página web de la Corporación, el aviso de convocatoria pública, dirigido a las personas interesadas en optar al cargo de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

Que se presentaron 43 aspirantes, de los cuales 37 cumplieron con los requisitos previstos en el Decreto 1076 de 2015, Decreto 1083 de 2015 y la Circular No. 1000-2-115203 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), por lo tanto conformaron la lista de elegibles.

Que el artículo 27 literal j) de la Ley 99 de 1993, que consagra las funciones del Consejo Directivo, dispone:

"Nombrar de acuerdo al artículo siguiente o remover de conformidad con los estatutos, al Director General de la Corporación".

Que además el artículo 29 de los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, consagra las funciones del Consejo Directivo y en el numeral 12 estipula *"Nombrar o remover conforme a la Ley, sus decretos reglamentarios y los estatutos, al Director General de la Corporación".*

[Handwritten signature]



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

**ACUERDO CD No. 056 DE 2019
(DICIEMBRE 16 DE 2019)**

**"POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA EL DIRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC
PARA EL PERIODO INSTITUCIONAL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2023"**

Página 2 de 2

Que en virtud de lo anterior, se debe proceder por parte del Consejo Directivo, a designar Director General de Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, para el periodo institucional 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023.

Por lo expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

ACUERDA:


ARTÍCULO PRIMERO: Designar como Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, para el periodo institucional 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023, a MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ, identificado con C.C. No. 94.399.245.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Santiago de Cali, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2019.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Presidente


OSCAR MARINO GÓMEZ GARCÍA
Secretario

ACTA DE POSESION


**ACTA DE POSESION DEL DOCTOR MARCO ANTONIO SUAREZ
GUTIERREZ DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE
DEL CAUCA- C.V.C.**

En el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia el primero (1) de Enero de dos mil veinte (2020) siendo las 09:30 a.m. el Notario Segundo del Circulo de Cali PEDRO JOSE BARRETO VACA, constituyó el despacho de la Notaria Segunda (02) del Circulo de Cali en audiencia pública con el fin de dar posesión a el Doctor MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ, mayor de edad, vecino de este municipio, identificado con la cedula de ciudadanía No.94.399.245 de Cali, del cargo de DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-C.V.C, designado mediante acuerdo CD No. 056 de diciembre 16 de 2019 expedido por el Consejo Directivo De la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -C.V.C . para ejercer como Director General para el periodo institucional 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre 2023. Una vez leído el Acuerdo DC No.056 de Diciembre 16 de 2019 el Notario tomó el juramento al Doctor MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ, ordenado por la ley 136 de Junio 1994 (artículo 94) en los siguientes términos “JURA A DIOS Y PROMETE AL PUEBLO CUMPLIR LA CONSTITUCION, LAS LEYES DE COLOMBIA, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS” a lo cual el Doctor MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ, contestó : “SI JURO” y el Notario le replicó “SI ASI LO HICIERE, QUE DIOS Y LA PATRIA LO PREMIE Y SI NO QUE EL O ELLA LO DEMANDE”. El posesionado presentó la siguiente documentación: fotocopia de la cedula de ciudadanía, acuerdo CD No. 056 de diciembre 16 de 2019 expedido por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -C.V.C.,

Notaría Segunda de Cali
Pedro José Barreto Vaca
Notario

Certificado de la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación, Certificado de antecedentes de la Policía Nacional de Colombia. No siendo otro el objeto de presente diligencia se da por terminada en el lugar y fecha del encabezamiento una vez leída aprobada y firmada por quienes en ella han intervenido.

EL POSESIONADO



MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ

CC 94.399.245 de Cali



PEDRO JOSE BARRETO VACA

Notario Segundo del Circulo de Cali

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.399.245**
SUAREZ GUTIERREZ

APELLIDOS
MARCO ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-OCT-1973**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

31-OCT-1991 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3100100-00044141-M-0094399245-20080810 0001969612A 1 3270015014